



ACUERDO ARGENTINA - FMI

Un análisis "de fondo"

- FEBRERO 2022 -



CLAE
CENTRO LATINOAMERICANO
DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO



VALORIZACIÓN Y FUGA COMO MODELO DEL NEOLIBERALISMO ARGENTINO

Desde la década del setenta, la **fuga de capitales** ha constituido una problemática estructural para el desarrollo económico de Argentina, así como también para muchos países de América Latina. Gerald Epstein define a este fenómeno como la salida de capitales residentes en el país, producida por el intento de escapar a las regulaciones estatales y los efectos de las políticas públicas. En el caso argentino, este proceso empezó a tomar especial relevancia y a comportarse como un problema endémico de la economía a partir de la desregulación del sector financiero implementada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, en su gestión durante 1976-1981 en el marco de la última dictadura cívico-militar.

LA VALORIZACIÓN FINANCIERA

Para el caso argentino, la fuga de capitales es una maniobra necesaria de la valorización financiera, devenido en el régimen social de acumulación de las riquezas (es decir, en modelo económico) del neoliberalismo criollo en sus tres ciclos:



Entre las principales consecuencias económicas y sociales de la valorización financiera se encuentra la desinversión en la capacidad productiva nacional, así como también un proceso regresivo en la distribución del ingreso. La evasión de las empresas y de las personas dueñas de estos capitales obstaculiza una mejora en la distribución primaria a través de políticas sociales y económicas estatales. Para este modelo económico, el Estado se convierte en el promotor de la desregulación económica y en el garante de las divisas extranjeras que las inversiones especulativas requieren antes de la fuga del país, vía el endeudamiento con los organismos internacionales, que actúan siempre en complicidad y persiguiendo objetivos geopolíticos y estratégicos.

El modelo económico de la valorización financiera se define porque la única forma de capital que realmente se valoriza, es decir, que se amplía -absorbiendo una mayor cuota del plustrabajo social- es aquel que tiene capacidad de participar de los circuitos selectivos del sistema financiero, como la adquisición de títulos de deuda pública o composiciones accionarias de grandes empresas públicas y privadas.

De esta manera, se explica el rol principal que desempeña la fuga de capitales como clausura de los periodos de valorización financiera y endeudamiento público, y las crisis sociales que alimentan. A partir de allí, siempre se destaca la dificultad de pagar la deuda y el malestar social producido por la implementación de las políticas económicas de ajuste, impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, siempre en coordinación con el Departamento del Tesoro (ministerio de economía) norteamericano.

Esta situación estalló en Argentina en las crisis de 1989, 2001 y, con vigencia en la actualidad, 2018. Las corridas bancarias son el indicio de la fuga de capitales y siempre desatan una estampida inflacionaria que golpea sobre el poder adquisitivo de los sectores asalariados y pymes.

LAS CRISIS ARGENTINAS: 1989, 2001 Y 2018

Estas tres crisis tienen características comunes y diferenciales. Todas se terminan de desatar cuando el Estado no puede resolver, desde el recetario de los organismos internacionales, el endeudamiento luego de que el capital especulativo “rompe” la bicicleta financiera (carry trade) para “fugarse” del país.

En términos de clases, el régimen de acumulación vía valorización financiera de los períodos Martínez de Hoz (Dictadura cívico-militar) y Cavallo (Menem y De La Rúa) fue articulada y promovida por actores y cuadros provenientes de los grupos oligopólicos locales, en alianza a sectores de la banca de inversión, particularmente de origen angloamericano. Para el ciclo de Macri, con Prat Gay, Dujovne y Caputto como articuladores económicos, la ecuación se dió vuelta y el proceso fue conducido por el capital transnacional, quedando en posición subordinada las fracciones oligopólicas locales que, sin embargo, pudieron realizar “pingües” negocios en los sectores agrario, energético, infotelecomunicaciones y construcción (la llamada “Patria Contratista”). Este cambio en las ecuaciones se deban a los cambio en la estructura social que impuso el neoliberalismo con su recetario de desregularización y extranjerización de la economía.

Ya en términos de economía política, la crisis de 1989 se desató como un gran golpe de mercado al intento del por entonces presidente Raúl Alfonsín de rearticular un modelo económico sin seguir, al pie de la letra, el recetario neoliberal. Tras el brutal endeudamiento de la Dictadura militar, para sostener el ciclo de valorización financiera de los actores locales y transnacionales, el boicot sistemático del Fondo y el Banco Mundial al “Plan Austral” y al “Plan Primavera” devino en crisis. La suspensión del pago de la deuda externa por parte de la República Argentina en 1988, producto de la deliberada falta de asistencia por parte los organismos internacionales, y la corrida cambiaria de febrero de 1989, promovida por los capitales internacionales que no gozaron del beneficio de la estatización de su deuda externa privada, terminaron desatando una crisis hiperinflacionaria precipitó la llegada anticipada al gobierno de Carlos Menem, quien con dolarización de la economía y privatización de las empresas públicas inauguró el segundo ciclo de valorización financiera del país.

La crisis de 2001 es la explosión económica y social tras la política neoliberal de desindustrialización y desguace del Estado para el sostenimiento de la valorización financiera, con una recesión económica que empezó, al menos, en 1998. El impulso al endeudamiento público provino de los sucesivos paquetes financieros otorgados por los organismos internacionales al país en sus infructuosos intentos por evitar el colapso del modelo de la convertibilidad (dolarización, donde \$Ar1 es equivalente a U\$S1) en un contexto donde no había empresa pública por vender y en donde la economía “quemaba” deliberadamente sus capacidades de generar riquezas desde la producción agraria e industrial.

Tras la rebelión popular y la renuncia de Fernando De La Rúa en diciembre de 2001, la suspensión del pago de la deuda externa de Adolfo Rodríguez Saá y la devaluación (“pesificación asimétrica”) de Eduardo Duhalde rompieron el modelo de la convertibilidad. La masacre del puente Avellaneda en junio de 2002 determinó que la disputa abierta de proyectos, entre el neoliberalismo (y su plan de dolarización definitiva) y el neodesarrollismo (y su propuesta de devaluación para reactivar la producción), se dirima en elecciones. El triunfo de Néstor Kirchner en abril de 2003 consolida el camino productivista emprendido por Duhalde y, a partir de 2008, será profundizado con una diversificación industrial con protagonismo estatal.

Quedan pocas dudas de que el macrismo fue el capítulo argentino de la ofensiva del gran capital transnacional sobre el proceso de integración regional. En otros artículos ya hemos explicado el papel jugado por los *holdouts* en relación al golpe económico y político sobre la llamada “década ganada”.

En abril de 2016, el macrismo consiguió los votos necesarios para que el Congreso argentino aprobara el pago a los Fondos Buitres.

“El acuerdo, negociado por Luis Caputo, uno de los reemplazantes de Prat-Gay junto a Nicolás Dujovne, se firmó el 22 de abril y obligó a Argentina a abonar 9.352 millones de dólares por 220 acuerdos. Una cifra que, por ejemplo, dobla lo que se le pagó a Repsol por la nacionalización de YPF. También en abril, el país colocó bonos en la bolsa de Nueva York y ocasionó una demanda que superó los 60.000 millones de dólares”. (Diario El País. España. 26/12/2016)

La reinstalación del régimen de la valorización financiera nunca había sido tan rápida. A estas medidas se sumó el festín de bonos en la bicicleta financiera (*carry trade*), con las LEBAC’s y las LELIQ’s como negocios mucho más rentables que la producción de soja. “Un economista analista de mercados y negocios agropecuarios plantea que las letras del BCRA es la mejor opción financiera para no perder dinero con la oleaginosa. ‘Si vendés soja hoy a 3.715 pesos y colocás en Lebacs a 30 días, suponiendo una tasa de 2% mensual y acumulativa, al 15 de noviembre tenés 4.180 pesos’. [...] esto es más conveniente que vender soja y posicionarse en dólar” (Rizzo & Strassorier, “Las 50 sombras del agro, 2021).

La magnitud del saqueo señalaba, también, su corta duración. La acumulación por desposesión tiene el límite del hambre de la gente. Y tuvo también el límite de la pequeña y mediana burguesía de la industria nacional, que fue fagocitada también por los grandes capitales. La victoria electoral del macrismo en las elecciones de medio término en octubre de 2017 había llenado de confianza a la coalición de gobierno. Una confianza ciega que les impidió ver la rearticulación popular que el incipiente ciclo de luchas venía generando y que terminaría de soldar una unidad 50 días después, en los hechos de diciembre de 2017, donde una protesta de calles derrotó políticamente al gobierno.

Los “mercados”, el eufemismo televisivo para el gran capital transnacional, terminarían por disolver su confianza en el macrismo con tres corridas bancarias en abril, junio y agosto de 2018. Fiel al recetario neoliberal, el macrismo recurrió al FMI para garantizar un “seguro de cambio” de 50 mil millones de dólares. La jugada fue sencilla. El gobierno argentino pondría los dólares necesarios para que las inversiones especulativas puedan irse del país. Parafraseando a Atahualpa Yupanqui, las deudas son de nosotros, las divisas son ajenas.



EL GOBIERNO DEL FRENTE DE TODOS ANTE EL ENDEUDAMIENTO



Tras el triunfo electoral del Frente de Tódes en 2019, la primera gran decisión del gobierno fue la suspensión del último giro del préstamo del FMI. La deuda quedó valuada en 44 mil millones de dólares. El nuevo gobierno tenía plena conciencia de que el nudo de los problemas económicos heredados por la implementación del ciclo macrista de valorización financiera estaba en el feroz endeudamiento con dos grandes frentes:

a- con los tenedores privados de títulos de deuda pública del país.

b- con el FMI, que operó como un garante de la fuga de capitales especulativos.

En agosto de 2020, en el marco de la crisis de la Pandemia Mundial del Covid-19, el ministro de economía Martín Guzmán cerró una negociación con los tenedores privados de la deuda pública argentina, pagando con una sustancial quita de unos U\$45 por cada U\$100 de deuda nominal. Para tal negociación, el FMI ofició de garante.

Desde allí en adelante, es difícil eludir que las grandes decisiones de política económica del Palacio de Hacienda no hayan sido realizadas en un entendimiento con el Fondo o, al menos, con su conocimiento. Así sucedió con las jubilaciones en diciembre de 2019, a las semanas de la asunción de Alberto Fernández. Se suspendió la fórmula regresiva impuesta por Macri para dar aumentos discrecionales hasta tener una nueva fórmula. Esto se concretó a comienzos de 2021 y determinó que la jubilación mínima perdiera frente a la inflación, con el fin de la política de asistencia a la Pandemia en noviembre de 2020 y con el rescate de YPF vía aumento de combustibles, una medida que impacta en toda la estructura de precios de la economía y, por tanto, en la inflación.

Las negociaciones con el Fondo no venían sencillas. La Directora del organismo, la economista búlgara alineada a la estrategia globalista, Kristalina Georgieva, se veía fuertemente condicionada por su número dos, el norteamericano de origen japonés, Geoffrey Okamoto, un neoconservador designado por Trump en el organismo. Okamoto impulsó un boicot sistemático a las negociaciones con Argentina, que siempre pretendió -y aún pretende- un acuerdo heterodoxo.

En abril de 2021, Okamoto declaró que “la próxima emisión de ‘Derechos Especiales de Giro’ (DEG, la ‘moneda de cuenta’ del Fondo, resultante de una canasta integrada por el dólar, el yen, el yuan, el euro y la libra esterlina) es para ‘ajustar las reservas’ de los países socios del organismo, no para suplantar programas específicos de crédito en apoyo de reformas estructurales’. Tampoco son -agregó- ‘para evitar una necesaria reestructuración de deuda’ que tengan los países con acreedores privados” (Portal Infobae, 10/04/2021, la negrita es nuestra). Okamoto, jugando en línea con la estrategia neoconservadora, intentaba que Argentina pida la escupidera y acepte el recetario neoliberal clásico que el Fondo siempre promueve.

Por su parte, el torniquete de la facción neoconservadora angloamericana no termina en Okamoto. El segundo de la Secretaría del Tesoro (ministerio de economía) de Joe Biden, es David Lipton, quien fuera el número dos de Christine Lagarde cuando otorgaron el crédito a Macri. La representación de los Estados Unidos en la mesa del organismo, donde cuenta con el casi el 17% de los votos, en las manos de Lipton, fue la única en votar en contra del Informe que el propio Directorio del FMI realizó como evaluación del préstamo que el propio organismo hizo a Argentina y que, a las claras, violó sus propios estatutos.

“A pesar de la clara comprensión de las experiencias anteriores, y en ausencia de alternativas de política (reconfiguración de la deuda y MFC), el programa terminó con una postura de política procíclica, posiblemente empeorando la fuga de capitales en lugar de impulsar la confianza”, señaló el directorio del FMI en su evaluación del crédito otorgado a Argentina. (23/12/2021. Agencia TELAM)

Lipton, para justificar su voto en representación del gobierno norteamericano, “defendió la legalidad `absoluta` del paquete de ayuda al país; mencionando que avanzó en 2018 y 2019 dentro de los conductos del FMI, con todas las legalidades necesarias. Y que si bien se trató de un programa, obviamente, fallido, esto se debió exclusivamente a las cuestiones internas de Argentina y no a las fallas en el diseño y aprobación del préstamo” (Ámbito Financiero, 7/01/2022).

Estos eran los contornos de la dura negociación que tenía el gobierno por delante hacia fines del año pasado. De hecho, la presión neoconservadora sobre la Argentina fue lo que el propio presidente Alberto Fernández intentó aflojar en una reunión con Georgieva en el marco del encuentro del G20 en Roma en octubre de 2021.

La magnitud de la deuda argentina, que absorbió por sí sola el 60% de la cartera de préstamos del FMI, no resulta un tema menor para la propia supervivencia del organismo en una nueva situación internacional con el ascenso financiero de China a nivel global. En tal sentido, no resulta descabellado pensar que la actual administración de la Casa Blanca haya maniobrado, en los últimos meses, “en favor” de la Argentina, sabiendo que un “no entendimiento” con la tercera economía latinoamericana puede repercutir negativamente en el conjunto de su “patrio trasero”.

Esto sucede en un momento donde el objetivo que orienta la política internacional de la Casa Blanca es bloquear cualquier nueva inversión de China en la región y, ante ello, una mala gestión de la deuda argentina puede devenir en un burdo error estratégico del capitalismo angloamericano en su disputa global con China.

Entendemos que allí está el marco de justificación para que Joe Biden reclamara, a inicios de diciembre de 2021, la renuncia del neoconservador Okamoto como número dos del FMI, cargo tácitamente reservado para los Estados Unidos en el directorio del organismo, para imponer la designación de la economista indú-americana, Gita Gopinath, una globalista que goza de la confianza de la secretaría del tesoro norteamericana Janet Yellen.

Kristalina Georgieva, Gerente del FMI: "La pandemia ha llevado a un aumento en la escala y el alcance de los desafíos macroeconómicos que enfrentan nuestros países miembros, creo que Gita, universalmente reconocida como una de las principales macroeconomistas del mundo, tiene precisamente la experiencia que necesitamos". "Entristece ver que Geoffrey se va, pero, al mismo tiempo, me complace que Gita haya decidido quedarse y aceptar la nueva responsabilidad de ser nuestra FDMD [subdirectora]" (Diario Ámbito Financiero, 2/12/2021).



El gobierno argentino rápidamente visualizó la oportunidad que brindaba el cambio en el Directorio del FMI, que explicita el cambio en las correlaciones de fuerzas hacia el interior de los Estados Unidos. La confirmación definitiva llegaría a través de la gira que a mediados de enero realizó el ministro de relaciones exteriores, Santiago Cafiero, que obtuvo la confirmación de que el "ala política" de Joe Biden, representada en su Secretario de Estado (canciller) Antony Blinken, respalda la firma del acuerdo.

Pero, más allá de las oportunidades, el presidente Fernández observó las amenazas. La debilidad que infligió la derrota electoral de medio término en noviembre de 2021, la extorsiva corrida cambiaria abierta en enero, la brecha superior al 100% entre el dólar oficial y el ilegal, y la alarma encendida por el retiro de depósitos en dólares de los bancos, que oscilaba entre U\$S 300 y U\$S500 millones en los primeros 20 días del año, aceleró los tiempos del acuerdo.

LA "LETRA CHICA" DE UN ACUERDO QUE INQUIETA

Todos los detalles que se saben del acuerdo parten del anuncio realizado por el Ministro de Economía Martín Guzmán. El mismo, prevé un esquema de trabajo para los próximos 2 años y medio, pero se extendería por los próximos 10 años.

Se negoció un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior, de alrededor de 44.500 millones de dólares. Los desembolsos van a venir con revisiones, además de un monitoreo trimestral. Este nuevo préstamo del Fondo permitirá realizar los pagos del programa acordado por el macrismo, el remanente se utilizará para ir acumulando reservas.

Por el momento, no hay quitas de capital ni de interés, incluida la polémica sobretasa. Esto otorga un manto de impunidad a dos puntas: a las por entonces autoridades del FMI y a los principales cuadros del gobierno macrista. Sin dudas, y al menos para un sector del gobierno, la aceptación de este acuerdo no fue realizada en absoluta libertad. El contexto de la derrota electoral de medio término, los niveles de extorsión internacional y mediática-parlamentaria-judicial local, y la puesta en marcha de un golpe de mercado con una quita sistemática de depósitos bancarios en dólares desde inicios de año, podrían considerarse factores influyentes.

Si bien es cierto que se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el FMI con el compromiso de resguardar la continuidad de la recuperación económica, luego de la crisis -causada por las dos pandemias: la macrista y la del Covid- con un "incremento moderado del gasto", hay una serie de definiciones que, sin caer en ideologismos, preocupan.

Probablemente sean estos los que generan las desavenencias hacia el interior de la coalición de gobierno y determinaron la maniobra que realizó Máximo Kirchner al renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Sin "romper", la decisión se limita sólo a "marcar distancia" del camino emprendido para desatar el nudo gordiano de la deuda, con prioridad en la negociación emprendida con la línea de funcionarios e intereses del globalismo angloamericano.

Hay que tener en cuenta que todavía los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI están en pleno proceso de escritura. Acordada la letra definitiva, ese documento deberá ser aprobado por el Congreso argentino y el board del Fondo. A nuestro análisis, la "letra chica" que más preocupa está en los siguientes puntos que pasamos a detallar:

1) Déficit fiscal

El acuerdo prevé una reducción progresiva del déficit fiscal. Se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI para el año 2022, 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024.

Si bien es cierto que es un objetivo loable en materia de política económica, una reducción del déficit de este nivel y velocidad, para la situación de la Argentina actual, implica centrar la mirada en las importaciones y en seguir conteniendo el ingreso al país de bienes de capital necesarios para una reactivación del crecimiento industrial, la generación empleos de calidad y la promoción de una redistribución del ingreso positiva entre Trabajo y Capital.

Del lado exportador, la cosa está aún más difícil. La reprimarización de la economía fue una premisa del programa económico del macrismo, quienes públicamente hablaban del "Modelo Australia", es decir, una economía agraria de alto valor agregado para el mercado de consumo del norte global. La cumplieron, como era de prever, a medias, acentuando la dependencia de la exportación a granel de cereales y oleaginosas. Además, paralizaron el Mercosur y los acuerdos con terceros países en los que Argentina había logrado colocar bienes de consumo y de capital (maquinaria agrícola, industria del software) de origen industrial.

En síntesis, priorizar la reducción del déficit implica poner una traba al despliegue del propio crecimiento económico que se necesita para quebrar la inercia de una economía que puede funcionar con el 40% de pobreza y un desempleo de dos dígitos.

Como un “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, el déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó los 2,77 billones de dólares durante el año fiscal 2021, que acabó el pasado 30 de septiembre, el segundo mayor de la historia del país. Esa cifra supone una mejora respecto a los números del 2020, cuando el país batió el récord de 3,13 billones dólares de déficit presupuestario. “Como parte de la economía en conjunto, el déficit en 2021 supuso el 12,4% del producto interior bruto (PIB), por debajo del 15% del año fiscal 2020” (Agencia EFE, 22/10/2021). Sólo el entendimiento de las ecuaciones de poder mundial pueden explicar esta exigencia del FMI con la Argentina.

2) Tasa de interés real local positiva con restricción al financiamiento monetario vía BCRA

Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto; en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 y poder converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.

Es decir, el FMI nos pide aplicar el dogma neoliberal de la “autonomía” del Banco Central. Autonomía del Gobierno, subordinación al gran capital transnacional.

El objetivo es tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos. Tal definición va a, necesariamente, encarecer el acceso al crédito productivo de la banca comercial, incluido el que otorga el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, por lejos los grandes promotores del financiamiento de Pymes agrarias e industriales.

Todo esto, en un país donde vastos sectores de la burguesía y la pequeña burguesía se han acostumbrado a parasitar en los ciclos de Valorización Financiera una tasa de interés real positiva, que aún sin que se monte el carry trade (o bicicleta), rápidamente se aleja de toda inversión productiva.

De conjunto, tal decisión puede espiralizar y alimentar la inflación, la variable con la que las fracciones oligopólicas, centralmente del comercio y la producción de alimentos, operan para captar ingresos de los sectores asalariados, en concordancia con objetivos transnacionales para nuestra economía, que buscan ganancias extraordinarias a costa de un “costo laboral” que no podrían tener en el norte global.

El aumento de la tasa agiganta la bola de nieve de las LELIQ's. El analista Diego Genoud, recuperando datos de la consultora Econviews, afirma que “los intereses aumentaron \$1,35 billones (2,9% del PBI) durante 2021 y llegaron al 8,8% del PBI”. Desarmar esa bomba del ciclo de valorización financiera parece una tarea imposible con estos márgenes de ajuste en la emisión monetaria que Guzmán acordó con el Fondo (1% este año y 0,6% del PBI en 2023)

3) Nuevo financiamiento sin discusión de la estafa macrista y sin eliminación de las sobretasas

Se ha negociado un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior. Es decir, alrededor de 44.500 millones de dólares.

Por el acuerdo suscripto en 2018, Argentina debe pagar U\$S1.000 millones de sobretasa por año. Esa multa, odiosa y costosa, se debe a la decisión política de Macri de aceptar un Stand-By por U\$S57.000 millones, que excede en un 1.300% la cuota societaria que el país tiene como integrante del FMI, que se ubica en torno al 0,67% de las acciones del organismo. En otras palabras, las y los 44 millones de argentinas y argentinos debemos pagar el 100% de la estafa que el macrismo nos impuso en complicidad al FMI y la Casa Blanca.

Sin dudas, Máximo Kirchner, en su nota de renuncia como jefe del bloque oficialista en Diputados, tuvo en cuenta este punto al señalar -con justeza- que no aspira "a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional".

El presidente Alberto Fernández trató el tema con Georgieva en la reunión del G20 realizada el pasado mes de octubre en Italia. En las declaraciones que Fernández realizó el lunes 31 de enero, tras la renuncia de Máximo Kirchner, en los estudios de la señal televisiva C5N, ante una pregunta de Gustavo Sylvestre, indicó que "eso se va a tratar en marzo, según me dijo Kristalina Georgieva. Si eso se aprueba, va a beneficiar a la Argentina. Nosotros seguimos insistiendo que esa sobretasa no debe ser cobrada" (Entrevista exclusiva al Presidente Fernández, C5N, 31/01/2022).

Sin embargo, lo indicado por el presidente parece poco probable, si queda fuera del memorándum que votará el Congreso argentino y el board del organismo. De hecho, el pasado 17 de diciembre el FMI emitió un comunicado sobre el debate celebrado en una reunión de directorio sobre los recursos del organismo, dentro de los que se encuentran los sobrecargos sobre el financiamiento.

En dicho comunicado se indica que algunos directores "estaban abiertos a explorar el alivio de recargos temporales para ayudar a los miembros prestatarios a liberar recursos para abordar los desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia", mientras que otros "no vieron la necesidad de revisar las políticas sobre recargos o cambiar su diseño en esta etapa, dado el bajo costo total general de los préstamos del Fondo" y señalaron "el papel fundamental de los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo". Finalmente, "la mayoría de los demás directores expresaron su disposición a una revisión más holística y en el momento apropiado de las políticas de recargos en el contexto del modelo de ingresos del Fondo y las perspectivas financieras generales" (Diario El Cronista, 17/12/2021).

En síntesis, el directorio del Fondo trató el tema a demanda de Argentina y el G20, pero no pareciera muy dispuesto a cuestionarlo, y ni siquiera la crisis sanitaria y económica generada por la Pandemia del Covid-19 es un argumento de peso para revisar, repetimos, "el papel fundamental que juegan los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo". Si, se puede afirmar: Para el FMI vale más la usura que la salud de la humanidad.

MÁS ALLÁ DEL ACUERDO, ¿QUIÉN PAGA LA DEUDA?

Por fuera de la polémica abierta ante esos tres puntos específicos, hay que reconocer que - para bien o para mal- el acuerdo con el Fondo es una validación general de la política económica de Martín Guzmán. La misma acepta y promueve los mecanismos de acuerdos y controles de precios para atacar la inflación, y el sostenimiento de las restricciones sobre el mercado de divisas, algo que perjudica a la sociedad pero que, al menos, impide que la fuga sistemática que impuso el macrismo continúe bloqueada.

En ese sentido, el gobierno argentino, a partir del anuncio del 28 de enero, trabajará en fortalecer la administración tributaria, atacando los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento agropecuario, el de mayor contribución a la economía nacional. También se intentará disponer de mejores medidas para atacar el lavado de dinero.

El problema es grave y conocido. Según el economista Alfredo Zaiat, en 2017 “la estimación de transferencias de utilidades de multinacionales que operan en el país a guaridas fiscales fue de unos 3200 millones de dólares, que implicó una pérdida de recaudación equivalente a 1125 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial (100 pesos por unidad [de julio de 2021]), esta evasión/elusión impositiva suma 112.500 millones de pesos, poco más de un tercio de los recursos obtenidos por el Aporte Extraordinario de las grandes fortunas” (Diario Página 12, 4 de julio de 2021).

Para el cumplimiento del objetivo de golpear sobre evasores y fugadores, resultará muy importante el accionar que realice la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, presidida por el senador José Mayans y hegemonizada por el núcleo parlamentario kirchnerista que cuenta con, al menos 40 Diputados y 9 Senadores. Entre los integrantes de esa Comisión, donde participa también la oposición, aparecen los nombres de Itai Hagman, Rodolfo Tailhade, José Luis Gioja y Oscar Parrilli, todos con vínculos estrechos con Cristina Fernández. En la prensa ya ha trascendido que se está trabajando en base a un pormenorizado informe realizado por el Banco Central titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.

Al respecto, el analista Jairo Straccia, en un artículo de Diario con vos, señaló que el Banco Central giró un material confidencial a esa Comisión Bicameral, que cuenta con la información oficial de las principales personas físicas y jurídicas que compraron (y fugaron) divisas del país durante el ciclo macrista. Straccia señaló que “los 100 que más divisas compraron en esos cuatro años se llevaron US\$ 24.679 millones, más de la mitad de los US\$ 44.500 millones que el FMI terminó girando cuando se cortó el crédito internacional tras dos años de una fiesta de deuda y liberalización del flujo de capitales financieros”.

Según el mismo analista, “con la lista de compradores en su poder y la intervención de la AFIP, la vicepresidenta sueña con empezar a darle cuerpo a aquella frase del 10 de diciembre [...] `Presidente, comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que la fugaron, que se la llevaron para no pagar impuestos. Que sea un puente de negociaciones’”. (Portal Diario con Vos, 6/02/2022).

Otro frente a atacar es el de los negocios que el macrismo dejó anudados para todos los sectores que conformaron y conforman la alianza de clases que sostuvo y sostiene su proyecto político. Tal es el caso de Techint, protagonista en las definiciones de la opositora Asociación Empresaria Argentina (AEA). Sobre esto, el periodista Roberto Navarro señala que el Gobierno ya acordó con el grupo monopólico de la siderurgia reducir drásticamente el subsidio de Macri que, tomando los valores de 2021, implicaría un ahorro para el Estado de 498 millones de dólares, nada menos que el 0,25% del PBI. “Techint paga la cuenta de la mitad del ajuste acordado” para 2022, del 2,3% planteado en el Presupuesto que no se aprobó al 1,7% que se negoció con el Fondo en relación a la baja de subsidios.

El periodista indica también que “la empresa acepta la rebaja sin judicializar el tema porque a la vez va a vender los tubos sin costura para la construcción del gasoducto que irá de Vaca Muerta a Buenos Aires y de ahí a Santa Fe. Ese fue el acuerdo. Solo con la construcción del primer tramo, que es posible realizar en poco más de un año, se pueden transportar 20 millones de BTU diarios, cubrir el 20% del consumo local y reemplazar buena parte del gas importado actual. El ahorro en divisas al reemplazar ese gas importado sería 0,5% del PBI. Pero aún no se realizó la licitación. No hay fecha de realización ni responsable del retraso. ¿Energía? ¿Industria? ¿Jefatura de Gabinete? ¿Un poco cada uno?” (Portal El Destape, 5/02/2022).

En materia geopolítica, el trazado de otra inserción de Argentina en la economía mundial resulta una tarea de primer orden. Las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández en Rusia, en el marco de su reunión bilateral con Vladimir Putin, señaló que “tenemos que ver el modo en que Argentina se convierta en una puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido”, para luego agregar que “en el 2015 llegó un gobierno que otra vez volcó su mirada en EEUU y fue el que nos generó la deuda pesadísima que tenemos. Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande con el Fondo y EEUU”.

En China, el Presidente Alberto Fernández trazó una serie de maniobras disruptivas con el torniquete geopolítico que el capital angloamericano y la Casa Blanca imponen a través de la deuda odiosa con el FMI. Fernández anunció una serie de inversiones de alto impacto de China en Argentina por más de 23 mil millones de dólares, se firmó el ingreso del país al proyecto económico-estratégico chino de la "Nueva Ruta de la Seda" y, luego de la cumbre con Xi Jinping, visitó las instalaciones de Huawei, la nave insignia de la aristocracia financiera y tecnológica del gigante asiático.

La estrategia del gobierno de Alberto Fernández deja observar una estrategia multilateral con clara influencia neoconservadora, para resolver sus principales problemas de gestión: financiamiento y vacunas. Un equilibrio para no quedar afuera del financiamiento internacional, que sería la estrategia perfecta, a no ser por un detalle: el pueblo argentino sigue sufriendo. Escribimos desde la esperanza. Pero también estamos claros en que la redistribución de la riqueza no se consigue solamente gobernando.

Para dar cuerpo a esa disputa x la riqueza, la fuerza social popular, nacional y democrática - que hizo síntesis al calor de los 12 años de épica kirchnerista- tiene un programa político claro: independencia económica, soberanía política, justicia social. Esta fuerza recupera territorio, se capilariza en la calle, en el barro, desde la sororidad y el compromiso con la justicia social. La fuerza social que resistió y derrotó al macrismo, la que se moviliza socialmente, que participa políticamente, que se organiza, que teje redes. Esa fuerza sigue viva.

Pero en un mundo tan lleno de contradicciones de escala global, los sectores concentrados ganan poder e influencia, tejen sus redes corporativas con actores de la oligarquía local, de un lado y del otro del gobierno. La fuerza nacional popular y democrática no cuenta con mayoría propia. Y para imponer su programa necesita de la unidad. John William Cooke decía: "la unidad exige un claro propósito y una estrategia común variada en su aplicación, pero no aguada por malabarismos palabreros."



MÁS ALLÁ DEL ACUERDO: QUEBRAR LA VALORIZACIÓN
FINANCIERA Y CONSTRUIR EL PROYECTO DE LAS MAYORÍAS



No puede entenderse la situación en que se dirime el acuerdo con el FMI anunciado por el presidente Alberto Fernández, sin tener en cuenta el problema estructural e histórico de la política (y la economía) argentina, la llamada Valorización Financiera, que establece los vínculos entre fuga de capitales y endeudamiento.

En tanto régimen social de acumulación, o modelo económico, la Valorización Financiera es un proceso en el que la entrada de divisas a través del endeudamiento en dólares, es utilizada para valorizarse y rápidamente fugarse. Este es el problema de fondo, y tiene claros responsables.

Después de realizar una historización del endeudamiento argentino desde el 1976, en tiempos de Martínez de Hoz hasta el desendeudamiento de Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernández denunció en Cuba la deuda tomada por Macri en 2018 como insostenible e ilegítima, basada en una demostrada violación de los estatutos del Fondo y la utilización de dicha deuda sólo para la fuga de capitales.

El mismo Macri lo reconoció el 7 de diciembre de 2021, al señalar: “la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”. (Diario Perfil, 8/11/2021). También lo hizo el propio FMI, de la mano de Odd Per Brekk, vicejefe del departamento de Asia y Pacífico del organismo, quien el 22 de diciembre pasado lanzó un informe en el que reconoce también que el préstamo otorgado durante 2018 no fue utilizado para los fines convenidos (Diario Ámbito, 22/12/2021).

LA CRÓNICA DE LA VALORIZACIÓN FINANCIERA Y LA DEUDA ILEGÍTIMA DEL MACRISMO.

El ciclo de valorización financiera se (re)inaugura con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015. Comienza con un proceso de desregulación y liberalización de los mercados, permitiendo el ingreso de capitales extranjeros. Según un informe del BCRA, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país entre diciembre de 2015 y 2018 tuvieron su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Argentina volvió a emitir deuda en moneda extranjera y, con eso, volvió a darle poder de fuego en la economía doméstica a los Fondos Financieros de Inversión Global (FFIG).

Una crisis crediticia llevó a una serie de corridas cambiarias seguidas de devaluación. En mayo de 2018, el BCRA perdió 5000 millones de dólares en una semana. Allí es donde Macri anunció el inicio de las negociaciones con el FMI, de las que resultó la concesión de un préstamo en junio de 2018 que operó como “seguro de cambio” para el capital especulativo. Así se coronó el camino de la estrategia neoconservadora, con el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne como garante, y Templeton, JP Morgan y otros fondos como los principales actores financieros responsables de la corrida cambiaria de abril.

Dujovne renunció tras la contundente derrota del macrismo en las primarias presidenciales del 11 de agosto de 2019. Entre agosto y octubre de ese año, las elecciones primarias y las generales, ocurrió una nueva corrida cambiaria con una brusca devaluación. En ese marco, se produjo una pérdida de reservas de 17.000 millones y se fugaron 23.000 millones de dólares, casi la mitad del monto del préstamo otorgado por el FMI.

El ciclo se cerró con la imposición de un fuerte control de cambios, con restricciones y cupos a la compra de dólares, anunciadas por Macri y efectivizadas por Sandleris, ex titular del BCRA. La alianza Cambiemos recibió un país desendeudado en diciembre de 2015 y entregó uno completamente saqueado y en ruinas en diciembre de 2019. ¿Qué hubo en el medio? Un ciclo de valorización financiera.



Fuente: Informe "Argentina: Patria o FMI. Primero se crece después se paga", CLAE, Octubre 2021.

Para entender la magnitud del saqueo en números: Según el BCRA, "el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas de dólares adquirió US\$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US\$ 16.200 millones en compras netas durante el período, un total combinado de US\$ 57.324 millones" (Portal NODAL, 12/11/2021). Esa fuga fue, impunemente, a parar a paraísos fiscales.

En la Apertura de Sesiones del Congreso en marzo de 2020 Alberto Fernández expresó: "los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda" (Portal Va con firma, 17/082021).

LA HISTORIA NO ES NUEVA

La Valorización Financiera es el mismo proceso que operó en la profunda crisis de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y en la de 2001, que concluyó con la salida anticipada de Fernando De La Rúa.

Alfonsín se vio en negociaciones por una deuda también ilegítima tomada por la dictadura militar, donde infructuosamente intentó, mediante el Plan Austral y el Plan Primavera, cumplir las condiciones que imponía el FMI. En 1988 el Fondo rechazó los términos planteados por el gobierno argentino y Alfonsín se retiró prematuramente, para inaugurar la etapa ya conocida del menemismo, donde se profundizó la internacionalización financiera.

Durante este período, la fuga de capitales constituyó un fenómeno permanente. Para 1995, 11.455 millones de dólares fueron fugados de Argentina, marcando un aumento del 583 % en comparación con el año anterior. Así para el año 2001, el stock de activos financieros externos del sector privado representaba cerca del 40% del PIB en el caso de la Argentina, alcanzando máximos históricos (Kulfas, 2007).

En este contexto, en diciembre del 2001 se desató una de las peores crisis económicas y sociales que la Argentina haya visto. En cuanto a deuda, durante los 10 años anteriores a la crisis, la Argentina firmó cuatro acuerdos sucesivos de financiamiento y hubo un aumento constante del saldo del crédito pendiente frente al FMI. En esos años el FMI realizó cerca de 50 misiones entre 1991 y 2002, principalmente en los sectores fiscal, monetario y bancario. Las condiciones impuestas por el FMI tampoco han variado respecto de aquella época: reducción del déficit fiscal, imponer políticas de ajuste, reducir el protagonismo activo del Estado en la economía y realizar reformas estructurales al mundo del trabajo (vía reforma al sistema jubilatorio y la flexibilización laboral).

Retomar la historia reciente de nuestro país permite entender la crónica de una estafa anunciada y las condiciones en que se desarrollan las negociaciones del gobierno con el FMI desde su entrada a la Casa Rosada. Este problema estructural de la economía argentina explica el poder de fuego que el sector financiero especulativo tiene para llevar adelante maniobras desestabilizadoras.

LA SOGA AL CUELLO: RECORRIDO DE LAS NEGOCIACIONES ANTE LA DEUDA INSOSTENIBLE

Hay que agregar que, como dice Cristina, a la pandemia macrista, se sumó la pandemia sanitaria a los 99 días de gobierno. En ese contexto, Alberto Fernández y el ministro de economía Martín Guzmán encabezaron las negociaciones con el FMI y los fondos tenedores de deuda. En mayo de 2020, luego de una corrida cambiaria sobre el dólar blue, que alcanzó entre el 14 y 15 de mayo, un máximo de \$138, un grupo de acreedores encabezados por BlackRock, presentó una contrapropuesta de renegociación de la deuda argentina bajo Ley extranjera.

Con apoyo del FMI, las rondas de negociación culminaron con el anuncio de Guzmán, el 31 de agosto, de un acuerdo con el 99% de los acreedores de deuda bajo Ley extranjera. Este hecho fue el que condicionó el acuerdo con el FMI cerrado recientemente en enero de 2022.

En 2021, Alberto Fernández puso nuevamente en escena la ilegitimidad de la deuda contraída en tiempos de macrismo. El 1 de marzo, en la Apertura de Sesiones del Congreso, instruyó iniciar una querrela criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la toma de deuda ilegal con el FMI en 2018. Las acciones, sabemos, todavía no prosperaron. El Poder Judicial todavía le debe explicaciones a la democracia argentina y a su pueblo.

El 4 de marzo, promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación. La Ley había sido aprobada por unanimidad en el Senado, pero votada en contra por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica en Diputados.

En los meses siguientes, Alberto Fernández y Martín Guzmán recorrieron Europa buscando apoyo para negociar con el Fondo y el Club de París. Las consignas fueron extensión de plazos y quita de sobretasas. Como resultado, Guzmán anunció el 22 de junio pasado un acuerdo con el Club de París sobre los vencimientos de la deuda.

En el marco de las elecciones primarias de medio término, realizadas el 12 de septiembre, con un resultado desfavorable para el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio en una carta que publicó el 16 de septiembre, donde dio a conocer las diferencias al interior de la coalición. Hace hincapié en que hay que alinear salarios, jubilaciones y profundizar el control de precios de los alimentos, para que el crecimiento no se lo queden “tres o cuatro vivos nada más”, algo que ya había expresado en diciembre de 2020.

La Vicepresidenta fue crítica con lo que considera una “política de recorte fiscal equivocada”. Los números lo evidencian. A pesar de los índices de recuperación económica, lo que no se recuperan son los salarios, los presupuestos ministeriales se sub ejecutaron, los alimentos aumentan sus precios y no se renuevan las ayudas sociales para la asistencia de la Pandemia, como el IFE, con el 41% de población por debajo de la línea de pobreza.

Mientras tanto, Fernández y Guzmán siguen en diálogos y negociaciones con el Fondo. Un día después de la carta, el 17 de septiembre, se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 622/21, donde se incorporan los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por 4.330 millones de dólares al presupuesto 2021 con el único fin de pagar los inminentes vencimientos programados en la deuda contraída en 2018 por el macrismo ante el mismo organismo. Es decir, se usaron los DEG (especie de “moneda”) del Fondo para pagarle al propio Fondo.

Octubre de 2020 transcurrió en medio de la presentación de renunciaciones de funcionarios asociados a la conducción de Cristina, cambios de gabinete, movilizaciones de calle y golpes económicos.

Los actores financieros pusieron en juego sus herramientas de desestabilización, en lo que puede interpretarse como una carrera preelectoral de los mercados hacia las elecciones generales de noviembre. El 19 de octubre, el riesgo país tocó un máximo de 1652 puntos, superando el último récord de septiembre de 2020. Los bonos argentinos en Wall Street perforaban el piso de los U\$S35 y el dólar blue aumentaba la brecha cambiaria.

En el medio, sucedieron las dos movilizaciones más grandes del período, las “dos plazas” en el marco de la celebración del 17 de octubre, con el sector del kirchnerismo “duro” movilizándolo el mismo 17 con el “no pago al FMI” como consigna y, al día siguiente, el 18, marcha el sector más “moderado”, con la CGT y el Movimiento Evita como principales protagonistas, que sostienen la consigna de acuerdo pero con condiciones a favor de las y los trabajadores.

A partir de aquí, los medios hegemónicos pusieron en el centro de la escena a Máximo Kirchner, conducción de La Cámpora, quien realizó varios actos preelectorales y viralizó la consigna “primero se crece, después se paga”. Mientras tanto, los sectores concentrados rechazaron el control de precios de alimentos emprendido por Roberto Felletti, desde la Secretaría de Comercio Interior y amenazó con desabastecimientos. Así lo advirtió Mario Grinman, dirigente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Por su parte, el Presidente Fernández siguió intentando cerrar alianzas internacionales que generaran mejores condiciones para lograr el acuerdo con el FMI. El 2 de noviembre, durante la Cumbre Climática de Glasgow, coordinada por el Presidente Joe Biden, pidió a los líderes globales una mayor flexibilidad en plazos y tasas “para honrar la deuda” y expresó que Argentina “está dispuesta a vincular parte del pago de la deuda a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde que Argentina necesita” (Diario Clarín, 2/11/2021), alineándose al plan global de transición energética.

Reacomodadas las fichas del tablero político después de las elecciones generales del 14 de noviembre de 2021, con un resultado desfavorable para el Frente de Todos (que perdió mayoría en el Senado, aunque aumentó el caudal de votos en comparación con las primarias), los ejes centrales de la agenda rondaron sobre la falta de control de la inflación, la subida del dólar blue, el estallido de casos por la variante Omicron, las negociaciones previas al tratamiento del Presupuesto 2022 y la carrera contra el tiempo para cerrar el acuerdo con el FMI, ante los inminentes vencimientos de los plazos en marzo de 2022.

El 15 de noviembre, Alberto Fernández, anunció el envío de un proyecto de Ley al Congreso de la Nación Argentina que consiste en un programa económico de base para un acuerdo con el FMI, denominado Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Fernández señaló al respecto: “el programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el Staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán”. Y aclaró que el mismo se hará “sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste” (Diario El Cronista, 29/11/2021).

Los sectores económicos financieros, tensionaron al gobierno desde la agenda pública, planteando “la falta de confianza de los mercados” y la “incertidumbre” provocada por “la falta de un plan” del oficialismo. Nicolas Viveros, estratega de renta fija de Capital Markets Argentina (CMA), indicó: “Había un par de factores principales que podían impactar positivamente en los bonos, que eran las elecciones y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De estos factores, el primero no terminó de convencer al mercado en cuanto al resultado y el segundo parece que se está dilatando permanentemente”, con una “desconfianza generalizada en el Gobierno” por parte de inversores locales y extranjeros y la “falta de un plan económico sostenible, todo esto en un contexto de bajas reservas, alta inflación y una alta expectativa de devaluación” (Diario El Cronista, 23/11/2021)

En este contexto, Cristina Kirchner, volvió a romper el silencio el 27 de noviembre. En una carta publicada por Twitter, con centralidad en las operaciones mediáticas sobre su papel en las negociaciones con el Fondo. Bajo el título “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, expresó que “la lapicera no la tiene Cristina... siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Pero aclaró: “¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. (...) Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.

LA PREVIA DE UN ACUERDO A CONTRARRELOJ

El mes de diciembre transcurrió en medio de las acaloradas discusiones en dos frentes: con una oposición intransigente y envalentonada por el resultado electoral en relación al Presupuesto 2022, y con el FMI para seguir afinando unas mejores condiciones para el acuerdo.

El 2 de diciembre pasado, Alberto Fernandez, desde la 27° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, pidió al FMI “que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales” (Diario Ámbito, 3/12/2021).

Días después, luego de las conversaciones que funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA sostuvieron en Washington con el FMI, el organismo realizó un Informe sobre el préstamo a Argentina. El documento, publicado el 10 de diciembre, observa, a pesar del pedido del Presidente, que “serán necesarias más conversaciones” y establece por primera vez una hoja de ruta para bajar la inflación, en la cual se destaca la reducción “gradual” del déficit, la acumulación de reservas y la baja del financiamiento del Banco Central al Tesoro. Podemos decir que ya se podían vislumbrar las viejas recetas y condiciones conocidas del Fondo.

En esta previa, con un acuerdo a contrarreloj, se desarrolló el debate sobre el Presupuesto y su posterior rechazo opositor en la Cámara de Diputados. A pesar de que dichos sectores ya venían anticipando el rechazo, basándose en que no podían aprobar un presupuesto sin conocer lo que contenía el proyecto, o sin acceder a la letra chica del plan plurianual con el FMI, su negativa finalmente tuvo como excusa la intervención del diputado Máximo Kirchner. Así lo expresó Ritondo, presidente del PRO en la Cámara.

El rechazo al Presupuesto condicionó de forma negativa a Argentina en la previa del acuerdo. Tal como lo declaró Guzmán, la aprobación era “la base de la programación macroeconómica que se tomaba como escenario para las negociaciones”. El mismo Presidente Fernández, al respecto, afirmó que “Kristalina Georgieva se vio sorprendida por la no aprobación del Presupuesto. Le pareció algo raro que pudiera ocurrir en un país. Objetivamente es un retroceso” (Diario *Ámbito*, 19/12/2021).

El economista Alfredo Zaiat analiza dicha jugada como un “golpe blando” de la estrategia desestabilizadora de la oposición. “Una oposición que voltea el Presupuesto 2022 y pone en riesgo la negociación de refinanciación de deuda con el FMI. Las corporaciones mediáticas de derecha que festejan y promueven esas movidas. El poder económico las avala con el silencio. Cada una de esas piezas conforma el tablero de la avanzada desestabilizadora sobre el gobierno del Frente de Todos. La oposición copia al Cavallo de 1988” (Diario *Página 12*, 19/12/2021).

El año cierra con el pago de US \$1.855 millones al Fondo en lo que fue el segundo vencimiento de capital. Así, el diario *El Cronista* sentenció que “se rompió el chanchito y ya no hay dólares para postergar el acuerdo por la deuda con el FMI”, agregando que “con el pago de casi US\$1.900 millones la Argentina extinguió casi la totalidad de los US\$4.334 millones en DEG que el organismo envió hace apenas cuatro meses, como parte del aporte extraordinario a los países miembros para combatir la crisis desatada por la pandemia de Covid-19” (Diario *El Cronista*, 22/12/2021).

Cristina Fernández lo explicó en una nota publicada en sus redes sociales el 18 de enero titulada “Pandemia Macrista vs. Pandemia COVID-19”. Allí destacó que en el año 2021, la pandemia macrista fue más costosa que la sanitaria: 1,1% del PBI (en dólares) vs. 0,9% (en pesos), respectivamente. Con la “yapa” de que el macrismo sacó las divisas que necesitaba Argentina para pagarle al FMI, ya que éste solo acepta pago en dólares.

Recuperando la experiencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la denominada “crisis europea de los PIIGS” de 2010-2012 que, perdiendo ante Mariano Rajoy y el derechista Partido Popular, tomó la decisión de “correrse a un costado para que el partido resurja”, la economista Delfina Rossi, hace una pregunta interesante: “¿tiene la Argentina una alternativa mejor que un acuerdo (bueno o malo) con el FMI? Está claro que el pecado original en este caso lo produjo Macri y la complicidad obtenida por el propio Fondo, ahora bien, ¿cuenta la Argentina con los engranajes políticos y el resorte económico para torcer al establishment?” (Portal *El cohete a la luna*, 30/01/2022).

Ensayamos aquí una breve respuesta: existe una fuerza social y política, representada por las figuras de Cristina y Máximo Kirchner, que sí cuenta con el caudal político y electoral para hacer de resorte político y confrontar con el FMI y sus aliados locales, pero que hoy no maneja los resortes institucionales del país. Quienes sí manejan dichos engranajes político-institucionales no pueden (o no quieren) llevar adelante dicha confrontación, por los intereses en disputa que se encuentran representados.

Sabemos que lo económico es lo primero, pero lo político es lo principal. Reconocer la deuda como legítima fue decisión política. Responsabilizar a quienes firmaron una deuda fraudulenta, denunciar las irregularidades y exigir su revisión fueron algunos de los hechos que confirman un camino que marcó Cristina, allá por 2019, en Cuba. Un camino que el gobierno no transitó. Por eso se hace difícil ver alternativas a la firma del acuerdo. Porque ya estamos jugando en su cancha. La salida, sabemos, no es fácil, pero deberá incluir indefectiblemente apostar a desatar las energías de lucha de la fuerza social nacional y popular, que ha dado reiteradas muestras en la historia de lo que es capaz cuando pone a funcionar sus engranajes políticos.



ACUERDO CON EL FMI: MANIOBRAS EN LA ESCENA POLÍTICA

El pasado viernes 28 de enero Alberto Fernández anunció el acuerdo con una puesta en escena un tanto triunfalista. Un tono similar se observó en el ministro de economía Martín Guzmán que, luego de explicar los detalles económicos del acuerdo, agradeció victorioso a los principales actores del Frente de Todos y a su equipo en el Palacio de Hacienda.

Con el correr de las horas y los días, dicho tono se fue apagando para dar lugar a posiciones más sensatas y acordes con lo que verdaderamente significa un acuerdo con el FMI para cualquier país del planeta.

“No celebro lo que firmamos. Esa no es la expresión correcta; no hay nada que celebrar. Pero si el viernes no firmábamos, hoy no estaría hablando con usted sino analizando si decretábamos feriado cambiario el lunes”, señaló Alberto Fernández en una entrevista concedida al cronista Mario Wainfeld (*Diario Página 12*, 30/01/2021).

Para ese momento, el silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández señalaba una evidente tensión con el acuerdo alcanzado. Por otro lado, la idea de un feriado cambiario, más allá de que la urgencia sea real o exagerada, habla de la debilidad económica que el país atraviesa luego de la *demolición* macrista y la pandemia mundial del Covid-19.

El presidente argentino afirmó que la aceleración del entendimiento con el FMI se realizó para destrabar un urgente acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para el ingreso de divisas. Con esto, el presidente terminó por posponer cualquier alternativa de llevar a juicio una deuda odiosa e ilegítima, no abrir la alternativa incierta del default, y construir desde el arranque un escenario de fuerzas apostando a la integración regional y a una articulación con Pekín y Moscú. Existen indicios de que, de haber seguido Trump en la Casa Blanca, ese hubiese sido el único camino posible.

En relación a lo planteado, Alberto Fernández argumentó, en la entrevista concedida a Wainfeld, que “China y Rusia no son excepción –describe y se enoja un poco–, se equivocan los que creen que podemos arreglar con ellos a espaldas del resto del mundo. No entregan nada si no se está en regla con los organismos internacionales de crédito”.

Del otro lado de la grieta, con afirmaciones tan delirantes como que “el FMI se hizo peronista”, algunos actores radicalizados del macrismo, como Fernando Iglesias, se posicionaron en contra del acuerdo.

Sin embargo, todo indica que la mayoría de los parlamentarios de esta coalición política aprobarán el acuerdo en el Congreso, aún falseando la realidad y cacareando en los estudios de *Todo Noticias - TN* (del Grupo Clarín, principal articulador de la alianza empresaria opositora a la fuerza en posición de gobierno AEA) y *La Nación Más - LN+* (medio del que se dice que el propio Mauricio Macri es propietario). Otra opción es que se abstengan, lo que permitiría el mismo resultado, pero lavándose las manos de toda responsabilidad sobre la deuda contraída por su propio gobierno.

Así lo indicó la presidenta de PRO, la “halcón” Patricia Bullrich y alineada a la conducción de Mauricio Macri, quien adelantó en una entrevista en *Radio Mitre* que Juntos por el Cambio (JXC) no negaría el financiamiento que la Casa Rosada necesita para cumplir el acuerdo firmado con el FMI. Bullrich afirmó que “cuando decimos 'queremos ver la letra chica' no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque en realidad el Congreso no vota eso, el Congreso vota el financiamiento [para que el gobierno pague el acuerdo alcanzado]”, destacando que el acuerdo anunciado “le parece importante en el sentido de que estábamos al borde del abismo” (Portal *El Destape*, 30/01/2021).

Todo parece indicar que de la misma manera procederá el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, una “paloma” con intenciones presidenciales en 2023. Rodríguez Larreta en septiembre de 2021 realizó una gira por los Estados Unidos que incluyó un almuerzo con Bill Clinton, mentor de la actual cúpula del Partido Demócrata, a instancias de Rolando González Bunster, un empresario argentino-estadounidense que preside la Fundación del ex presidente norteamericano. La deuda y sus intenciones presidenciales para el 2023 fueron los puntos que trascendieron de la conversación.

Para los principales actores de la coalición opositora, el acuerdo alcanzado por Alberto Fernández garantiza una legitimación del ciclo de endeudamiento y fuga abierto por el gobierno macrista, tensiona el despegue económico que requiere el mercado interno para recuperar el poder adquisitivo de los sectores asalariados y pymes, y termina potenciando sus perspectivas políticas de cara a las próximas elecciones de 2023. De igual manera, resulta obvio decir que el acuerdo con el FMI tensiona el rumbo de la Argentina en línea con el posicionamiento geopolítico explícito de la principal fuerza de oposición argentina, tan propensa a celebrar cada 4 (independencia estadounidense), pero no cada 9 de julio (independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica).

Aunque pueda resultar paradójico, todo indica que la contradicción principal ante la firma del acuerdo entre Argentina y el FMI se ubica hacia el interior de la alianza social y política en posición de gobierno. El episodio que señala la centralidad que ha adquirido el debate interno de la coalición del Frente de Todos es la renuncia a la conducción del bloque oficialista en la Cámara de Diputados por parte de Máximo Kirchner.

Indicando que dará un paso al costado, pero permanecerá en el bloque, Máximo Kirchner señaló que “esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

La maniobra de Máximo Kirchner señaló que no todo es consenso en la coalición de gobierno. Mirado sólo desde lo político-institucional, tal decisión puede resultar incomprensible. La derrota gubernamental en la elección de medio término fuerza a muchas subjetividades de la coalición de gobierno a señalar la importancia de la unidad. Sin negar la necesidad de la misma, en un momento de relativa debilidad económica y política, es preciso indicar que la decisión de Kirchner no responde a una "acción de vidriera" o un "desmarque" dentro de la política institucional, sino a instalar una consigna que le permite al kirchnerismo legitimarse ante su propia fuerza social y electoral, por lejos la mayoritaria de la coalición de gobierno. Al mismo tiempo, la decisión indica la disputa de visiones, de proyectos estratégicos, que cortan transversalmente a la coalición de gobierno. Queda claro que no es una decisión individual de Máximo sino que su decisión busca capitalizar el caudal electoral identificado al programa político de la fuerza nacional, popular y democrática, que se expresa en consignas como "primero se crece y después se paga" y "Patria o FMI".

La vacancia en la presidencia del bloque fue rápidamente cubierta por Alberto Fernández con el diputado Germán Martínez. Integrante de la Corriente Nacional de la Militancia, cuya referencia es el Exministro de Defensa Agustín Rossi, el diputado nacional por la Provincia de Santa Fe tiene, por la posición política de su espacio, la capacidad de pivotear entre las visiones contrapuestas dentro del Frente de Todos y garantizar la unidad necesaria para resolver la votación de un acuerdo que, pese al anuncio de Fernández y las explicaciones pormenorizadas de Martín Guzmán, todavía no fue escrito en el respectivo "memorando de entendimiento" entre el organismo internacional y el ejecutivo argentino.

El acuerdo alcanzado con el Fondo plantea una serie de dificultades. La intención de Martín Guzmán de sostener una "expansión moderada del gasto" se va diluyendo a medida que uno pone en perspectiva y en movimiento las diversas letras chicas del acuerdo. De igual manera, la posibilidad de un default de la deuda introduciría a la Argentina en un complejo laberinto, cuya resolución requiere una voluntad política y unas relaciones de fuerza con las que este gobierno no cuenta actualmente. En síntesis, la tarea gubernamental, del conjunto de actores de la coalición, es maniobrar más decididamente para alcanzar mayores márgenes de libertad de acción para la economía y la política nacional.

La actual situación económica, signada por la brutal transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y pymes hacia los grandes actores financieros, tecnológicos y energéticos, vía endeudamiento especulativo, dolarización de tarifas, leyes a medida, desregulaciones, inflación, corridas bancarias y fuga de capitales, como elementos claves de la política económica del macrismo, se complejiza ahora por el pago íntegro de la deuda con el Fondo, odiosa e injusta, que sólo sirvió como "seguro de cambio" para el gran capital transnacional y cipayo local. "La plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir", señaló el propio Mauricio Macri en un extraño ataque de sinceridad, pero sin dejar de culpar al kirchnerismo (Diario Perfil, 8/11/2021).

Durante los próximos 10 años la política económica será monitoreada por el FMI. Esta subordinación implica, en términos geopolíticos, que Argentina juegue como un actor dependiente en el cambio de fase que vive el sistema económico mundial, a partir de la denominada cuarta revolución industrial, que orienta la economía hacia la transformación digital, la hiperconectividad, los sistemas ciber-físicos, la computación cuántica, la robótica colaborativa y sensitiva, las bio y nanotecnologías y la conquista económica del espacio.

Por supuesto, el acuerdo es un marco difícilísimo, pero las posibilidades de revertir sus condicionamientos siempre están abiertas. Todo depende de una actitud más audaz. La decisión de que Argentina asuma la presidencia de la CELAC y el inmediato viaje a Rusia, China y Barbados (en agenda latinoamericana) luego del anuncio del acuerdo por parte del presidente Fernández, de la firma para la construcción de la central nuclear "Atucha III", que tiene al gobernador Kicillof como referencia; la invitación de Cristina Fernández a Lula Da Silva a un Acto Político en Argentina (el pasado 10 de diciembre) y su reciente viaje por Honduras a la asunción de Xiomara Castro, donde fue reconocida por haber sido protagonista en la resistencia internacional al Golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009; son acciones que marcan un rumbo en contrario al FMI.

Pero, para pasar del terreno de las maniobras al de las batallas se requiere, necesariamente, de una convocatoria al protagonismo popular en la toma de las decisiones políticas y estratégicas. No hay posibilidades de revertir la imposición neoliberal sin un pueblo en las calles y, también, en los lugares donde se toman las decisiones.



LA ÚNICA
DEUDA ES CON
EL PUEBLO

LA ESTRATEGIA NEOCONSERVADORA Y UN ACUERDO DISEÑADO
A SU MEDIDA

Si, como dijo un viejo luchador a inicios del siglo XX, la política es la expresión concentrada de la economía, toda decisión económica relevante es una decisión política asentada en el plano de la estrategia, es decir, en el plano de la disputa de fuerzas sociales y políticas, con sus actores económicos, político-institucionales y estratégicos.

El reciente acuerdo del presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional es una decisión que encaja en dicha afirmación. El problema, entonces, no es sólo económico. Por eso, más que evaluar la justeza o no del mismo, para responder más a apreciaciones morales que políticas, resulta interesante analizar ciertas dimensiones estratégicas de la disputa.

El entendimiento alcanzado con las autoridades del FMI, conducido por Kristalina Georgieva, no es más que una convalidación y una profundización de las decisiones de política económica bajo la administración del Presidente Alberto Fernández.

En otras palabras, el anuncio realizado por Fernández el pasado viernes 28 de enero explicita un acuerdo que ya estaba en marcha desde agosto de 2020, cuando el propio FMI fue garante de la negociación de Argentina con los tenedores privados de la deuda pública argentina que, a diferencia del default posterior a la crisis de diciembre de 2001, estaba mayoritariamente en manos de los grandes fondos financieros de inversión global, con el gigante BlackRock como gran protagonista.

Pese a una sustancial quita de unos U\$45 por cada U\$100 de deuda, que la deuda argentina haya estado en manos de los grandes pulpos financieros del capitalismo transnacionalizado explica la diferencia de tasas con las negociaciones realizadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en 2005 y 2010, que rondó en torno a U\$75 por cada U\$100. En aquel momento, sólo un 7% de los tenedores de deuda, los llamados Holdouts o "Fondos Buitre", definidos de esa manera porque jamás se sientan a negociar con los países deudores.

Los holdouts querellaron contra el país en más de un tribunal del planeta, con el famoso juez neoyorkino, el ultraconservador Thomas Griesa, y financiaron a la entonces oposición política del PRO. El caso más conocido es el de Laura Alonso. Figura prominente de la presión sobre las negociaciones con los Holdouts, Alonso era directora de la ONG Voces Vitales cuando esta recibió aportes de Paul Singer, dueño de NML Capital, uno de los "Buitres" más agresivos contra el país. Tras el triunfo de Macri, con acuerdo de varios Diputados y Senadores peronistas, los fondos buitres fueron gustosamente recompensados con el pago del 100% del valor nominal de los títulos de la deuda pública en marzo de 2016, haciendo caer las negociaciones emprendidas durante la denominada "década ganada".

Ya en enero de 2021, una nota de IP Profesional señalaba que "luego de que el presidente Alberto Fernández se encontrara de manera virtual con la titular del FMI, Kristalina Gerogieva, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que reducirían las necesidades de financiamiento del Banco Central y que buscarían poner 'las cuentas fiscales en orden'. Además, aseguró que avanzarían 'en un cuadro tarifario que respete el contorno que establece la ley de Presupuesto', de forma tal de mantener constante el ratio de PBI destinado a subsidios económicos" (*IP Profesional*, 22/01/2021).

En otras palabras, la política económica argentina viene ordenándose, desde por lo menos agosto de 2020, en el marco de las negociaciones bajo responsabilidad del ministro de economía Martín Guzmán con las máximas autoridades del Fondo Monetario.

Ese es el escenario de fondo que marcó las tensiones de la vicepresidenta Cristina Fernández con el presidente y el ministro de economía, que se hicieron explícitas luego de la derrota electoral en las elecciones primarias de medio término en septiembre del año pasado. Sólo basta releer la carta de Cristina Fernández del 16 de septiembre pasado, luego de la crisis abierta por la renuncia de funcionarios que responden a ella dentro del oficialismo, tras la derrota electoral y la falta de decisiones de Alberto Fernández. El Frente de Tódes es, al fin de cuentas, una coalición que expresa institucionalmente una amplia alianza de actores económicos, sociales y políticos, mayoritariamente del campo del pueblo, pero con expresiones y/o alianzas con la burguesía local y transnacional.

Cristina Fernández junto al núcleo kirchnerista del gobierno, es, tal como expresó el Ministro de Economía durante el anuncio del acuerdo, “la dueña de la fuerza” que, con la mayoría del caudal de votos, puso al Frente de Tódes en posición de gobierno. Pareciera, sin embargo, que su expresión institucional se encuentra subordinada. Así ella misma lo expresó en una carta que publicó en noviembre de 2021, donde indica que “la lapicera la tiene el presidente”. En reiteradas oportunidades, de igual manera, Alberto Fernández señaló: “El presidente soy yo y tengo que tomar decisiones”.

La tarea no es sencilla. El brutal endeudamiento se realizó para intentar sostener al gobierno de Mauricio Macri o, en su defecto, condicionar (y anular) al programa político popular que las mayorías sociales construyeron desde la resistencia de calles en el ciclo 2017-2019 y desde su alineamiento en el Frente de Tódes para dar la batalla político-institucional.

En otras palabras, el acuerdo con el FMI funciona como parte de la etapa demoledora de la estrategia de poder neoliberal a la que, según la socióloga Beatriz Stolowicz, le sigue una etapa que estabiliza la explotación y el despojo del capitalismo transnacionalizado.

El acuerdo alcanzado por Alberto Fernández señala la dura vigencia del diseño estratégico neoconservador para el país. Pareciera que el gobierno del Frente de Tódes se debate entre la estabilización sistémica o la ruptura con el neoliberalismo. Vale el ejemplo de la Concertación/Nueva Mayoría chilena que, luego de la dictadura pinochetista, sólo funcionó como legitimador de un modelo social plagado de desigualdad y pobreza, ese que terminó volando por los aires en el ciclo de protestas populares iniciado en 2019 y que hoy pone sus esperanzas en la Asamblea Constituyente y en la presidencia electa de Gabriel Boric.

El FMI realizará, con este acuerdo, un monitoreo trimestral de su política económica. Tal como lo señala el economista Andrés Asiain, “cuando no se logre cumplir una meta, y la historia con el organismo demuestra que ello es habitual, se deberá solicitar un waiver (perdón), aceptación que depende, en última instancia, de acuerdos políticos con las potencias que manejan el organismo, principalmente Estados Unidos” (Diario *Página 12*, 30/01/2021).

En consecuencia, la política exterior de Argentina pasará a estar fuertemente condicionada por la actual Administración de la Casa Blanca, justo en un momento donde se ha agudizado la lucha por la gobernanza global, enmarcada en la contradicción del G2, la ya conocida tensión entre Estados Unidos y China, más como redes financieras y tecnológicas que como Estados.

En otras palabras, poderosos actores transnacionales y locales están accionando para forzar al país a quedar subordinado a uno de los polos en un nuevo momento de la geopolítica mundial, donde se disputa el desarrollo, apropiación y explotación del conocimiento tecnológico de punta y el centro de gravedad del sistema económico mundial, entre el Atlántico Norte (Estados Unidos coparticipando a la OTAN y el G7 en una estrategia multilateral) y el Asia-Pacífico (China integrando a Rusia desde la Organización de Cooperación de Shanghai - OCS y la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental - ASEAN con la reciente entrada en vigor de la Asociación Económica Integral Regional - RCEP).

Finalmente, vale afirmar que tal situación debilita las posiciones de los actores locales decididos por la integración regional, la justicia social y el cambio de estructuras de un modelo social que tiene al 40% de las y los compatriotas de la Argentina bajo la línea de pobreza.

La gira del presidente Fernández por Rusia y China, el acuerdo de ingreso a la Ruta de la Seda, y los acuerdos de financiamiento chino, así como la visita a Barbados en calidad de Presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, a quince días de la gira del Canciller Santiago Cafiero en los Estados Unidos que ultimó políticamente el acuerdo con el FMI, y a poco más de una semana del anuncio, señala que la estrategia de Alberto parece inclinarse hacia un multilateralismo hiper condicionado por las cláusulas del acuerdo firmado recientemente. Mientras que haya este nivel de tensiones internacionales, siempre habrá márgenes para avanzar en una ruta de soberanía y justicia.

A su vez el cuerpo principal de la fuerza social nacional y popular ha demostrado, a través de movilizaciones de calle, tener un programa y consignas claras para defender los intereses de los sectores populares frente a la estrategia del poder concentrado financiero, judicial y mediático.

La difícil reducción del déficit primario en tres años, la sobretasa del préstamo que no fue anulada por el Fondo y que obliga a pagar la parte más odiosa de toda la deuda contraída por Macri, y la tasa de interés real positiva que se le exige al país (sin recurrir al financiamiento vía Banco Central) son puntos muy delicados de un acuerdo que no garantiza, por sí mismo, márgenes de autonomía para nuestro gobierno y justicia para nuestro pueblo. Es decir, vuelve a estar sobre la mesa una consigna histórica de los pueblos latinoamericanos: Patria ó FMI.

ARGENTINA, DOS FUERZAS EN DISPUTA

La prensa de Argentina instaló la idea de “la grieta” para explicar, siempre en favor de sus propios intereses, el enfrentamiento de intereses que atraviesa el país. En el libro “Más allá de los Monstruos”, publicado en junio de 2019, afirmamos que “en Argentina se encuentran potencialmente constituidas dos Fuerzas Sociales con vanguardias políticas-organizativas medianamente diferenciables, capacidad de movilización, programa político, e intereses contrapuestos”.

Esas Fuerzas, constituidas desde el alineamiento de actores que se visualiza a través del seguimiento del conflicto social, se han mantenido prácticamente inalteradas desde diciembre de 2017, cuando la reforma al mundo del trabajo que impulsaba el macrismo fueron derrotadas políticamente por un fuerte, masivo y heterogéneo movimiento de protesta conformó a un bloque unificado de oposición política que sería sintetizado institucionalmente en el Frente de Todos. Lo que sí cambió, por supuesto, fue el lugar en las posiciones institucionales, con el triunfo electoral de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Una de las Fuerzas, a la que podríamos denominar Nacional y Popular, sintetizada en el Frente de Todos, se personifica en los principales actores del kirchnerismo y el albertismo, con toda su heterogeneidad de identidades y posiciones. Su activismo principal se encuentra en las organizaciones populares sindicales, sociales y feministas, y ensaya alianzas con sectores económicos variados, como la Mesa Pyme (integrada al variado movimiento popular) y a actores económicos de peso, con los que, en muchos casos, construye alianzas tácticas coyunturales débiles, como es el caso del Consejo AgroIndustrial Argentino (CAA), conducido por las Bolsas de Cereales y la fracción minoritaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), representada en Eduardo Acevedo (Aceitera General Deheza).

La otra Fuerza, definible como Neoliberal y Antipopular, es representada en la política institucional por la Coalición Juntos, bajo conducción del partido macrista Propuesta Republicana (PRO), en alianza con otros partidos como el conservador Unión Cívica Radical (UCR) y la Acción por la República (ARI, de Elisa Carrió). La misma ha trazado una alianza estratégica con la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), expresión del empresariado “local” con fuertes conexiones al gran capital transnacional de origen angloamericano, cuya conducción está en manos del Grupo Clarín (Héctor Magnetto, multimedios), Techint (Paolo Rocca, siderurgia), Mercado Libre (Marcos Galperín, comercio electrónico), Cristiano Ratazzi (FIAT Argentina, automotriz), Arcor (Luis Pagani, alimentos) y Pan American Energy (Alejandro Bulgheroni, energía), entre otros.

También tiene el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias, el sector mayoritario de la UIA, representada en su actual presidente Daniel Funes de Rioja, y del Foro de Convergencia Empresarial, que básicamente es la articulación de AEA con la Asociación de Bancos de la Argentina - ABA, que nuclea los Bancos Privados Extranjeros (Santander, HSBC, BBVA, ICBC, JP Morgan, Itaú, Patagonia, entre otros), las Cámaras Nacionales de distintos sectores (de la construcción, la industria, el agro, la minería, la hotelería, las comunicaciones e informática, entre otros), y de Comercio de distintos países en Argentina (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Brasil, Chile), y una serie de think tanks como la Fundaciones Mediterránea (desde donde surgió Domingo Cavallo), Libertad (capítulo argentino de la red internacional neoconservadora ATLAS) y la DAIA-AMIA (Asociaciones Israelitas de Argentina). En síntesis, está articulada a las principales personificaciones visibles del poder fáctico. Su activismo principal se encuentra en las fracciones medias acomodadas, radicalizadas y movilizadas a través de medios de comunicación y redes sociales.

La clasificación no es estática, sino analítica. El conflicto social hace que el movimiento de los actores sea mucho más dinámico y complejo. Particularmente, los actores institucionales están obligados a redefinir sus posiciones conforme se muevan las correlaciones de fuerzas sociales. Lo presentado se basa, como hemos señalado, en la observación de ejes de conflictos sociales, a partir del seguimiento de hechos significativos, particularmente de los años 2019, 2020 y 2021, y el posicionamiento de los diferentes actores, bajo el principio de enfrentamiento de fuerzas sociales en disputa por imponer su visión al conjunto social.

Desde esta perspectiva, también se pueden explicar “los matices” de la coalición de gobierno. En tal sentido, pareciera, que la línea de intereses estratégicos dominantes en el gobierno argentino promueve un alineamiento de nuestro país a la alianza estratégica que el Vaticano (como actor político, pero también económico) tiene con la actual administración de la Casa Blanca del católico Joe Biden, hegemonizada por el proyecto estratégico globalista del capital de origen angloamericano.

A riesgo de pecar de esquemáticos, observamos que la línea estratégica que promueve dicho alineamiento involucra las actuaciones del Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, del Canciller, Santiago Cafiero, y del Ministro de Economía, Martín Guzmán. En la misma sintonía, aparece el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y, sin ser lo mismo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros varios ministros y secretarios de Estado. La base social que le presta apoyo tiene al sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) identificado con dos de los miembros de su triunvirato, Héctor Daer y Carlos Acuña, y el Movimiento Evita, la fuerza principal de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La otra línea de intereses estratégicos aparece representada en Cristina Fernández y el núcleo que la acompaña en el gobierno. El mismo apuesta por la rearticulación de un bloque general de poder a través del sostenimiento de la CELAC y la reactivación de la UNASUR, siempre en un entendimiento más decidido con China y Rusia.

Dicha línea controla el grueso del poder legislativo del Frente de Todos y, a través del gobernador Axel Kicillof, a la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito económico y político del país. La fuerza social que le presta apoyo tiene al sector identificado con Pablo Moyano dentro del triunvirato de la CGT, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), al Frente Patria Grande (Juan Grabois) de la UTEP y a la denominada "fuerza propia" de La Cámpora (Máximo Kirchner) y demás actores de "Unidad Ciudadana".

La compleja y dinámica alianza de sectores que componen el Frente de Todos se explica, centralmente, en la fuerza económica, social y política que se requería acumular para enfrentar y vencer al macrismo y su programa de gobierno alineado centralmente a los actores neoconservadores del capitalismo angloamericano, que controla numerosas cadenas de valor de la economía latinoamericana, sean lícitas o no (como el Narcotráfico).

Los actores neoconservadores, representados en la Administración Trump de la Casa Blanca, controlaron el FMI bajo la gestión de Christine Lagarde, la Directora que otorgó, incluso contra los estatutos del Fondo, el crédito al gobierno de Cambiemos. Vale decir, además, que el proyecto estratégico neoconservador aún sostiene protagonismo en el manejo del dólar a través de la Reserva Federal bajo la presidencia de Jerome Powell, elegido por Trump y validado el pasado mes de noviembre por Biden para seguir al frente de dicho organismo por cuatro años más, señalando las debilidades que tiene la actual conducción demócrata. Los neoconservadores también tienen asiento en la Secretaría del Tesoro (ministerio de economía), donde el segundo de la secretaria Janet Yellen, el "halcón" David Lipton, "es el delegado de la economista en el manejo de la agenda internacional del Tesoro y quien, en su rol como número dos de Christine Lagarde en el FMI, negoció el préstamo de US\$44 mil millones tomado por la gestión de Mauricio Macri" (diario *La Nación*, 9/01/2022).

ALGUNAS REFLEXIONES PARA EL DEBATE

El 28 de enero, Alberto Fernández y Martín Guzmán anunciaron el acuerdo alcanzado con el FMI. Un día después, el 29 de enero, el gobierno debía realizar un pago por más de U\$700 millones. Días antes, la vicepresidenta realizaba una visita a Honduras en el marco de la asunción de la nueva presidenta, y nos recordaba que “los pueblos siempre vuelven”.

Y a pesar de que hay claros responsables de que Argentina acuerde con el Fondo “con la soga al cuello o la espada de Damocles”, como expresó el presidente, en la agenda pública se repitió al infinito la noticia de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, p. La misma se presentó por un desacuerdo con las pautas en que estableció el entendimiento con el organismo, cuestionando su “falta de respeto a las instituciones”, o de su desacierto en este “momento complicado” para el país (Diario *El Cronista*, 28/12/2021).

La cuestión es que el acuerdo está firmado y, más allá de no conocer aún toda la “letra chica”, o de las promesas de que no va a haber ajuste para el bolsillo de los y las trabajadoras, lo cierto es que el rumbo que vienen demostrando las decisiones de quienes encabezaron las negociaciones, no parecieran terminar de ir en dicho sentido. Al cierre de 2021, la actividad económica creció 10%, mientras se sostiene el “otro riesgo país”: el 65% de los chicos del país -según un informe de la Universidad Católica Argentina- vive en la pobreza (Diario *Perfil*, 7/12/2021).

La historia demuestra que nunca nos ha ido bien con las recetas del FMI. El acuerdo alcanzado, inclusive, prevé que el organismo va a venir a auditar la política que lleve adelante el Ejecutivo Nacional cada 3 meses. Para muestras, basta un botón: En estos días, el Comisario General de la Policía Federal Argentina recibió a un representante del FMI. Por supuesto, ya sabemos lo que pasa cuando no dejamos conforme a su staff. Las represiones de diciembre de 2001 todavía están en la memoria colectiva de nuestro Pueblo.

Con la estrategia de negociación con el Fondo, se ha retrocedido en la pulseada de sostener la exigencia de que se denuncie y se trate a la deuda como lo que es: una acción ilegal de saqueo nacional, completa y probadamente ilegítima que las mayorías sociales no tienen por qué pagar, dadas sus marcadas violaciones constitucionales (en Argentina) y estatutarias (del FMI), entre otras numerosas irregularidades.

Como también señaló Cristina Fernández, muchos sectores del campo nacional y popular se mantuvieron escépticos cuando Néstor Kirchner reestructuró la deuda en 2005. Hasta podemos decir, cuando ella lo hizo con los tenedores privados de la deuda pública en 2010.

El escepticismo duró hasta que los hechos en la política demostraron que la estrategia consistió en sacarse de encima al FMI, para así inaugurar una época de crecimiento político y económico con inclusión social para las mayorías, en el marco de un proyecto de desarrollo productivo nacional y soberano, la llamada “década ganada” de los Pueblos de la Patria Grande.

Claro, hoy la situación no es la misma, ya que en lugar de pagar para escapar de la injerencia del Fondo, el organismo nos está prestando U\$S 45.000 millones para garantizar que se le pague los U\$S 45.000 millones que le prestó a Macri, en el marco de una estafa llamada Valorización Financiera, para beneficio de actores oligopólicos locales (como Vicentin) y transnacionales (como BlackRock).

Las críticas livianas desde los sectores opositores, con el único fin de cubrir a los responsables del delito de la fuga de capitales, ya las conocemos. Las críticas dentro de nuestras propias filas deben apuntar a tensionar para que el ajuste deje de hacerse sobre los bolsillos de los y las que trabajan. En ese sentido, vale decir que las tensiones al interior del bloque de Todes expresan eso.

Resulta fundamental en este sentido propiciar el debate profundo entre las mayorías del pueblo argentino, poner a disposición las herramientas necesarias para construir salidas a la crisis, involucrando las voces de la patria trabajadora, de las mujeres, las organizaciones sociales, los jóvenes en todas sus expresiones políticas. La construcción de organización y conciencia popular para la construcción de un proyecto de dignidad y de patria soberana.

El gobierno tiene la oportunidad de demostrar ahora que el crecimiento “se lo llevan unos cuatro vivos”, o se refleja en el bienestar del pueblo trabajador, nuestros niños y jubilados. Es lo que Cristina y Máximo Kirchner vienen exigiendo, en representación de una fuerza social que históricamente se articuló para lograr cambios estructurales en el país. Lo que apremia es el hambre. El país necesita un viraje hacia el proyecto popular que fue elegido por las mayorías, quienes se organizaron para poner al Frente de Todes en el gobierno en 2019. Lo que sigue estando en juego es bien simple: Patria o FMI.

Fuentes consultadas

Aharonian, A. (31 de enero de 2022). **Las diez “verdades” del acuerdo de Argentina con el FMI: ¿versión del propio Fondo?** Disponible en: <https://estrategia.la/2022/01/31/las-diez-verdades-del-acuerdo-de-argentina-con-el-fmi-version-del-propio-fondo/>

Caciabue, M. (31 de mayo de 2021): **¿Qué hay detrás de la disputa por el pago de la deuda argentina? Los proyectos políticos en pugna.** Disponible en: <https://www.nodal.am/2021/05/que-hay-detras-de-la-disputa-por-el-pago-de-la-deuda-argentina-los-proyectos-politicos-en-pugna-por-matias-caciabue/>

CLAE. (Noviembre 2021). **INFORME 1: Argentina: Patria o FMI/ Primero se crece después se paga.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/10/30/informe-1-argentina-patria-o-fmi-primero-se-crece-despues-se-paga/>

CLAE. (Noviembre 2021). **INFORME 2: ARGENTINA; PATRIA O FMI/ Macrismo y Covid, las dos pandemias.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/11/05/informe-2-argentina-patria-o-fmi-macrismo-y-covid-las-dos-pandemias/>

CLAE. (Noviembre 2021). **INFORME 3: ARGENTINA: PATRIA O FMI/ Lawfare, la doctrina de seguridad nacional del siglo XXI.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/11/12/argentina-patria-o-fmi-lawfare-la-doctrina-de-seguridad-nacional-del-siglo-xxi/>

CLAE. (Noviembre 2021). **INFORME 4: ARGENTINA: PATRIA O FMI.- El pueblo gobierna desde la calle.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/11/18/argentina-patria-o-fmi-4-el-pueblo-gobierna-desde-la-calle/>

Giménez P. y Caciabue M. (31 de diciembre de 2021). **La consolidación de una nueva fase del capitalismo.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/12/31/la-consolidacion-de-una-nueva-fase-del-capitalismo/>

Giménez P. y Caciabue M. (17 de octubre de 2021): **Otro 17 de octubre: un balance de la coyuntura con la mirada puesta en la calle.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/10/17/otro-17-de-octubre-un-balance-de-la-coyuntura-argentina-con-la-mirada-puesta-en-la-calle/>

Giménez, P. y Caciabue M. (3 de octubre de 2021): **Patria o FMI, consigna de la contradicción principal en Argentina.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/10/03/patria-o-fmi-consigna-de-la-contradiccion-principal-de-la-argentina/>

Giménez, P. (16 de septiembre de 2021): **Un paso en falso no es caída: Argentina necesita reactivar la movilización popular.** Disponible en: <https://rebelion.org/un-paso-en-falso-no-es-caida-argentina-necesita-reactivar-la-movilizacion-popular/>

Giménez, P. (9 de septiembre de 2021): **Argentina: dos pandemias y una enfermedad crónica.** Disponible en: <https://estrategia.la/2021/09/09/argentina-dos-pandemias-una-enfermedad-cronica/>



@CLAEFILA



@CLAELAT



DIRECTOR
ARAM AHARONIAN



TWITTER
@PAULAGIMENEZ_OK



TWITTER
@MATIASCAC

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Fundación FILA.

Informe de Coyuntura Nacional. Informe Noviembre 2021. Parte 1 de 4.

Director: Mg. Aram Aharonian

Coordinadores del Dossier: Mg. Paula Giménez y Lic. Matías Caciabue.

Equipo Editorial: Prof. Solange Martinez, Lic. Jimena Montoya, Diplm. Aixa Reyes.

Febrero de 2022. Buenos Aires, Argentina.

Contacto: centrodeanalisisestrategicola@gmail.com

WWW.STRATEGIA.LA



@CLAEFILA



@CLAELAT